



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022)**

<b>REFERENCIA:</b>	<b>SENTENCIA</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>RADICADO:</b>	<b>0050013105 013 2018 00307</b>
<b>ACTA N°:</b>	<b>42</b>

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** para pronunciarse en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de esta entidad frente a la sentencia con la cual el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 42** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### **1. LA DEMANDA<sup>1</sup>**

Se pretende con este proceso lo siguiente: **i)** Declarar que al señor **JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA** le asiste derecho a la **pensión de invalidez** desde el día que se estructure su pérdida de capacidad laboral y se le dictamine una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y condenar a **COLPENSIONES** a reconocerla con las mesadas adicionales de junio y diciembre. De manera subsidiaria, se reconozca la **indemnización sustitutiva de pensión de invalidez**. **ii)** Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, Indexación y costas.

---

<sup>1</sup> Carpeta "01PrimeraInstancia" Archivo PDF titulado "003Expediente013201800307, págs. 1 a 8"

Para sustentar sus pretensiones afirmó básicamente: **i)** Se encuentra afiliado al régimen de prima media desde el 1º de marzo de 1997, desde el año 2014 solicitó en reiteradas oportunidades al Fondo de Pensiones que lo calificara y ante la negativa recurrió a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien emitió dictamen el 18 de octubre de 2017 en el que se le estableció una **PCL del 53,32%**, origen común y **FE** del 28 de febrero de 2017, dictamen con el que no se está de acuerdo con la fecha de estructuración. **ii)** Por contar con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez la solicitó a COLPENSIONES través de Servientrega el 13 de febrero de 2018 y el 15 de febrero se recibió correo de la entidad requiriendo se aportaran los dictámenes de PCL de las JRCI y JNCI, los que no fueron autorizados u ordenaos por el Fondo.

## 2. CONTESTACIÓN COLPENSIONES<sup>2</sup>

En la contestación, la administradora del Régimen de Prima Media se opuso a las pretensiones planteando, en síntesis: **i)** El demandante no cumple con los requisitos de los arts. 38 y 39 de la L. 100/93, el segundo de estos modificado por el art. 1º de la L 860/03, que son: una PCL igual o superior al 50% para declararlo inválido ni el de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. **ii)** En cuanto a sanción por no pago oportuno, se opone porque no se ha incurrido en mora, al no consolidarse el derecho del actor. Propuso excepciones denominadas INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ A LA ACTORA, PETICIÓN DE LO NO DEBIDO, IMPROCEDENCIA INTERESES MORATORIOS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN INDEXADA, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y la EXCEPCIÓN INNOMINADA.

## 3. SENTENCIA

Mediante sentencia del **14 de noviembre de 2019** la **JUEZ TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN** tomó las siguientes decisiones<sup>3</sup>: **i) CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA la suma de \$36´530.893 a título de retroactivo **pensión de invalidez** liquidado desde el 20 de enero de 2016 hasta octubre de 2019, inclusive. A partir del 1º de noviembre de 2019 COLPENSIONES continuará pagando una mesada pensional equivalente al smlmv, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre y los incrementos de ley. **AUTORIZÓ** a COLPENSIONES a realizar los descuentos en salud. **ii) CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante la

<sup>2</sup> "01PrimerInstancia" Archivo PDF "009ContestacionDeDemanda"

<sup>3</sup> "01PrimerInstancia" Archivos PDF "036ActaDeAudienciaDeJuzgamiento" y "039AudienciaTramiteJuzgamiento013201800307"

**indexación** de las mesadas. **ii)** DECLARÓ imprósperas las excepciones, **ABSOLVIÓ** de las demás pretensiones a Colpensiones y **CONDENÓ** en costas a la entidad.

**4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>4</sup> intervino la apoderada de **COLPENSIONES** solicitando absolver a la entidad<sup>5</sup>: **i)** Transcribe los artículos 38 y 39 de la ley 100 de 1993 e indica que en la historia laboral del actor aparecían unos periodos que no se podían computar debido a que no registraba relación laboral para esos periodos específicos y por lo tanto no le pudieron ser computados para la sumatoria de semanas, pues era lo que aparecía dentro de Colpensiones para ese momento específico y frente a lo cual no se podía apartar. **ii)** Cita el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 para indicar que el dictamen pericial emitido por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia no podía aceptarse como primera opción, ya que era importante hacer el conducto regular para obtener la calificación como se le había instado a la parte demandante.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en grado jurisdiccional de **CONSULTA** y a partir de los planteamientos esbozados por COLPENSIONES en las alegaciones se impone abordar los siguientes problemas jurídicos: **i)** Si la única prueba idónea para determinar el estado de invalidez y su fecha de estructuración es el dictamen de la Junta de Calificación o es admisible dictamen pericial diferente **ii)** Si se acredita el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, norma vigente al momento de la fecha de estructuración de la invalidez, teniendo en cuenta si acredita la densidad de semanas mínimas para acceder a la prestación, aspecto en el que se analizará si se deben tener en cuenta como de 30 días los ciclos definidos en la providencia que se revisa, a partir de las inconsistencias que se presentan en la historia laboral, analizando si las mesadas están afectadas por el fenómeno de la prescripción. **iii)** Si son procedente o no los intereses moratorios, así como la indexación de las mesadas pensionales retroactivas.

**5. CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL – UN TRÁMITE DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA (AFP – ARL) Y**

<sup>4</sup>	Carpeta nombrada	"02SegundaInstancia"	Archivo	PDF	titulado
	"01AutoAdmiteCorreTraslado013201800307"				
<sup>5</sup>	Carpeta nombrada	"02SegundaInstancia"	Archivo	PDF	titulado
	"03AlegatosColpensiones"				

## **LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ SIN QUE SE CONSTITUYAN COMO PRUEBA SOLEMNE**

Se ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 el trámite de **calificación de la pérdida de capacidad laboral** determinante para establecer si una persona tiene derecho al reconocimiento de aquellas prestaciones económicas derivadas de disminución de la pérdida de capacidad laboral. Si se trata de una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de **origen común**, la persona se considera inválida<sup>6</sup> y eventualmente podrá al reconocimiento de una pensión de invalidez a cargo del Sistema General de Pensiones.

Ahora bien, respecto de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral en los términos descritos, **el artículo 41 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012**, dispone que corresponde a COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, debe manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad debe remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Se señala expresamente en la norma, que **“contra dichas decisiones proceden las acciones legales”**.

Estas entidades, **deben efectuar la calificación** con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez vigente a la fecha de calificación, que es expedido por el Gobierno Nacional y contempla los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral<sup>7</sup>, observando criterios éticos, científicos y de oportunidad, con el fin de garantizar el acceso a los derechos que tienen las personas afiliadas a la seguridad social<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> **ARTÍCULO 38 Ley 100. ESTADO DE INVALIDEZ.** Para los efectos del presente capítulo se considera *inválida* la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

<sup>7</sup> Decreto 917 de 1999 y Decreto 1507 de 2014

<sup>8</sup> **T 257 de 2019**

Pero si bien los artículos 9º de la Ley 776 de 2002, 142 del Decreto 19 de 2012 -que modificó el 142 de la Ley 100 de 1993-, y 18 de la Ley 1562 de 2012 fijaron un procedimiento especial para establecer la pérdida de capacidad laboral de una persona y otorgaron competencia a las juntas de calificación de invalidez, para que, con apego en los criterios de orden técnico y científico contenidos en el *Manual Único de Calificación de Invalidez*, emitieran la prueba idónea tendiente a demostrar tal condición; lo anterior no quiere decir que se le haya provisto a estos dictámenes la condición de prueba solemne o *ad substantiam actus*, pues los jueces están legitimados, con fundamento en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social**, para sopesar o darle mayor valor a otras pruebas que hubieran sido aportadas en debida forma al proceso y, con base en ellas, forjar su convencimiento sobre la realidad fáctica que se discute<sup>9</sup>, habiéndose razonado en la reciente providencia **SL 1041- 2022** del siguiente modo:

“Importa precisar que el juez laboral no puede ignorar las circunstancias particulares del asunto en cuestión, ni los elementos probatorios adosados, dado que en su integralidad *«permiten determinar el momento en el que se produce de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona»* (CSJ **SL4346-2020**).

Ahora bien, no se desconoce que el juzgador del trabajo está obligado a apoyar su decisión en los dictámenes obrantes en el proceso, con observancia de su contenido informativo y técnico; sin embargo, estos no constituyen prueba definitiva e incuestionable en el marco del proceso ordinario, por manera que el Tribunal en uso de sus facultades de libre apreciación de la prueba, es quien estaba llamado a definir, tal cual lo hizo, el estado de invalidez del promotor del litigio.

Al respecto, el proveído CSJ **SL3992-2019**, discurrió:

Para esos fines, el juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones.

Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria. (Subrayas fuera de texto).

Recabando en la libertad de valoración probatoria y de formación de convencimiento en providencias como la **SL 877 – 2020** reiterada en la **SL 5694-2021**, en las que con claridad se expresó:

«[...] en estricto rigor y para efectos de la valoración probatoria que ha de realizar el juzgador dentro de la actuación pertinente no están sometidos a la jerarquización propia de los procedimientos administrativos. No se olvide que,

<sup>9</sup> SL del 18 septiembre 2012, radicación 35450, **SL 9184-2016, SL 21693-2017, SL 4611- 2020**

de conformidad con la Constitución y la Ley, son los jueces laborales, y no los peritos, quienes tienen facultad para dirimir esa clase de diferendos de la seguridad social con el carácter de cosa juzgada. [...]

De la postura referida se infiere que el dictamen de las Juntas de Calificación de Invalidez, son algunos de los medios de prueba, no solemnes (sentencia SL 4571-2019) con los cuales se puede acreditar el grado de la pérdida de capacidad laboral, su origen y fecha de estructuración, teniendo el juez la potestad de apreciar libremente la prueba»

**6. CASO CONCRETO – SE ACREDITA EL DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ CON RETROACTIVO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN**

Sea lo primero señalar, que la pretensión principal de la demanda va dirigida a dos aspectos diferentes: **i)** De un lado, que se declare su calidad de inválido para lo que aporta un dictamen de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia del que afirma no estar de acuerdo con la fecha de estructuración; **ii)** Que se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer PENSIÓN DE INVALIDEZ.

Tras efectuar la valoración del acervo probatorio, la Juez arribó a tres conclusiones básicas: **i)** En primer lugar, partiendo de dos dictámenes obrantes en el proceso, el aportado con la demanda (PCL del **55,32%** y F de E el **28 de Febrero de 2017**) y el practicado en el transcurso del proceso que fuera decretado en Audiencia del 4 de abril del 2019 <sup>10</sup>, al efectuar la valoración acogió el que fuera proferido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE ANTIOQUIA como perito el de septiembre de 2019, en el que se determinó una PCL del **56.45%** de origen común y F de E el **20 de enero de 2016**<sup>11</sup>. Lo anterior, al encontrar acreditada para esta última calenda la presencia del tumor maligno de próstata, enfermedad que generó unas secuelas claras, marcadas en la evolución de la patología y en la presencia de sonda vesical de larga data, sin diagnóstico positivo de recuperación. **ii)** Encontró probado el cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 38 de la Ley 100 y 1 de la Ley 860 de 2003, teniendo en cuenta los ciclos mayo de 2008, diciembre de 2009 y a partir de enero de 2010 ciclos completos hasta junio de 2013, todos ellos **pagados en abril de 2014** por el empleador Agropecuaria Tierra Dulce Ltda.

La Sala comparte el análisis y decisión adoptada en la providencia que se revisa, pues analizada la documental en conjunto se encuentra que:

<sup>10</sup>	Carpeta	"01PrimeraInstancia"	Archivos	PDF	titulado
	"014AudienciaObligatoriaDeConciliacionDecisionDeExcepcionesPrevias"				
<sup>11</sup>	Carpeta	"01PrimeraInstancia"	Archivos	PDF	titulado
	"033DictamenJuntaRegionalCalificacion"				

- En efecto, allega la parte actora con la demanda respuesta N° 2014\_3712755 del 14 de mayo de 2014 a la petición de realización de calificación ante COLPENSIONES, en la que la entidad le informa que "...puede presentarse de lunes a viernes en los horarios de 8 a.m. a 5 p.m....", refiriéndole que "ASALUD" es la encargada de realizar tal trámite, suministrando las direcciones y número de contacto en caso de inquietudes sobre el trámite de pérdida de capacidad laboral e indicándole la documentación que debe presentar para su valoración<sup>12</sup>.
- Si bien se advierte que el accionante no concurrió a la realización del trámite a instancias de la administradora de pensiones, aportó el efectuado por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA de la Universidad de Antioquia que fuera emitido en marzo 18 de octubre del 2017, en el que se determinó una Pérdida de la Capacidad Laboral de **55.32 %**, origen común y **Fecha de Estructuración 28 de febrero de 2017** según los criterios establecidos en el Manual único para la Calificación de la Invalidez adoptado por el **Decreto 1507 de 2014**<sup>13</sup>. En él se tuvieron en cuenta dos deficiencias: **Tabla 5.4, clase final y literal 3,A** Deficiencia incontinencia urinaria; **Tabla 15.3 clase final y literal 3º** Lumbalgia crónica; **Tabla 14.5** Deficiencia Limitación arcos de movilidad de hombro derecho y **Tabla 14.5** Deficiencia Limitación arcos de movilidad de hombro izquierdo, generando como cálculo final de la deficiencia ponderada **24.62%**. Respecto a la clasificación del Rol Ocupacional, aplicó las **Tablas 1, 2 y 3** obteniendo como resultado **24.5%** Y respecto a otras áreas ocupacionales aplicó las **Tablas 6, 7, 8, 9 y 10** que arrojó un **6,2%**, para un total de **55.32%**
- Y se observa que en el dictamen realizado por la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** de fecha 13/09/2019<sup>14</sup> se tuvieron en cuenta otras deficiencias: **Tabla 1.3, CFP** (clase asignada por el factor principal) **2, CFM1** (clase asignada por el primer factor modular<sup>15</sup>) **1**, por las

<sup>12</sup> Carpeta "01PrimeraInstancia" - Archivo PDF titulado "003Expediente013201800307", **págs. 25 a 26"**

<sup>13</sup> Carpeta "01PrimeraInstancia" - Archivo PDF titulado "003Expediente013201800307", **págs. 27 a 32"**

<sup>14</sup> Carpeta "01PrimeraInstancia" - Archivo PDF titulado "033DictamenJuntaRegionalCalificación"

<sup>15</sup> **Decreto 1507 de 2014**. Anexo Técnico. Título Preliminar. En su numeral 5º "Metodología para la calificación de las deficiencias" En la Tabla 5 se identifican los factores moduladores, esto es, todos aquellos que no son factor principal, los cuales se deben calificar asignándoles un rango de deficiencia global porcentual a cada uno. Pueden existir hasta tres (3) factores moduladores que, para efectos de la fórmula de ajuste total, se denominarán FM1, FM2 y FM3. Los factores moduladores son los responsables de cambiar el grado en el rango de la clase predeterminada por el factor principal, haciendo que ésta se desplace hacia un grado mayor (a la derecha del valor

**deficiencias por alteraciones debidas a neoplasia o cáncer (11%); Tabla 5.9 CFP** (clase asignada por el factor principal) **3**, Deficiencia por enfermedad de la próstata y de las vesículas seminales **(20%)** que según el manual en esta “clase 3 (a)” se pone a las personas con síntomas “**continuos**” de disfunción de próstata – Presenta ablación de la próstata y de los vasos seminales; **Tabla 5.4 CFP** (clase asignada por el factor principal) **1**, Deficiencia por enfermedad en la vejiga **(5%)**, **Tabla 15.3 CFP** (clase asignada por el factor principal) **3** y **CFM2** (clase asignada por el segundo factor modular **4** por la Deficiencia de lesión de segmentos móviles de la columna lumbar **(28%)**, que generó como CÁLCULO FINAL DE LA DEFICIENCIA PONDERADA **25.65%**.

En la valoración del Rol Laboral tuvo en cuenta: En Restricciones del Rol Laboral **20**, en Restricciones de Autosuficiencia Económica **2** y por Restricciones de la edad cronológica **2.5**, para un total de **24.50%**

Y en la valoración de las Áreas Ocupacionales el valor total fue de **6.3%**

Concluyendo en el concepto del dictamen:

Valor final de la deficiencia (Ponderado) Título I	25,65%
Valor final rol laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales Título II	30.80%
<b>Pérdida de la capacidad laboral y ocupacional (Título I + Título II)</b>	<b>56,45%</b>

**Origen:** Enfermedad    **Riesgo:** Común    **Fecha de Estructuración:** 20/01/ 2016

**Fecha de declaratoria:** 13 de septiembre de 2019

**Para la sustentación de la fecha estructuración se indica:** “FE: 20 DE ENERO DE 2016, CON CONTROL POR UROLOGÍA EN QUE SE DETERMINA EL ESTADO CLÍNICO DE LA PATOLOGÍA DE CÁNCER DE PRÓSTATA – PATOLOGÍA QUE LO LLEVA AL SR JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLDA AL ESTADO DE INVALIDEZ. PATOLOGÍA DE ORIGEN COMÚN”

Pues bien, efectuando la valoración de la **HISTORIA CLÍNICA**<sup>16</sup> y de los conceptos emitidos en los dos dictámenes existentes en el plenario, la Sala llega al convencimiento que el señor JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA tiene una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% a partir de una **valoración integral** a la luz de lo previsto en la sentencia **C 425 del 2005**, al tener en cuenta los padecimientos de CÁNCER DE PRÓSTATA, PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA,

predeterminado, es decir mayor valor), o hacia un grado menor (a la izquierda del valor predeterminado, es decir menor valor). En caso de no existir valor modulador, se tomará el valor asignado en la clase de riesgo seleccionado.

<sup>16</sup> Carpeta “01PrimeraInstancia” - Archivo PDF titulado “003Expediente013201800307”, **págs. 51 a 310”**

DISFUNCIÓN ERÉCTIL SEVERA, INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA, ARTROSIS DEGENERATIVA DE LARGA DATA, LUMBALGIA CRÓNICA Y SÍNDROME BILATERAL MODERADO DE MANGUITO ROTADOR MÁS DOMINANCIA EN EL HOMBRO DERECHO<sup>17</sup>.

Ahora, se advierte que en el dictamen allegado por la parte actora se puntualiza “...No se valora el cáncer de próstata porque ya hubo remisión y no se ha detectado reactivación en la historia clínica aportada, pero sí su incontinencia certificada por urólogo” <sup>18</sup>; y es en este punto en el que difieren los dos dictámenes y por ende en la **Fecha de Estructuración de invalidez**, pues al no tener en cuenta el cáncer de próstata y la prostatectomía radical realizada el 15 de enero de 2016 en la Clínica del Norte, se define el **28 de febrero de 2017** como fecha de estructuración de la invalidez a partir de una resonancia magnética realizada en esa fecha y una PCL del 55.32%.

Pero a partir de lo analizado *in extenso* en el **acápito 5** de esta providencia y atendiendo a la libre apreciación de la prueba el estado de invalidez del promotor del litigio (**SL3992-2019, SL 877 – 2020, SL 5694- 2021, SL 1041- 2022 – SL 1420 - 2022**), en criterio de esta corporación el dictamen emanado de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y que fuera efectuado a partir de los criterios definidos en el MANUAL ÚNICO DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ aplicable al actor - Decreto 1507 del 2014- es el que determina la pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración conforme a la historia clínica actualizada incluyendo la totalidad de las deficiencias; experticia decretada válidamente en el transcurso del proceso, con el respeto del debido proceso y contradicción, sin que hubiese sido cuestionado en manera alguno por el apoderado de COLPENSIONES.

Ahora, en relación con el requisito de semanas, en la sentencia se convalidan las que fueron cotizadas a favor del señor JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA por los **ciclos de mayo de 2008, diciembre de 2009 y a partir de enero de 2010 ciclos completos hasta junio de 2013** y tiene la observación de “no registra la relación laboral en afiliación para este pago”, siendo claro que todos ellos fueron pagados en **abril de 2014 por Agropecuaria Tierra Dulce Ltda.**<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “33DictamenJuntaRegionalCalificación, **pág. 4**”

<sup>18</sup> Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “003Expediente013201800307”, **pág. 45**”

<sup>19</sup> Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “003Expediente013201800307,**págs. 313 a 378**”

Y COLPENSIONES en su alegación instancia insiste en que estos “periodos no se podían computar debido a que no registraba relación laboral para esos periodos específicos y por lo tanto no le pudieron ser computados para la sumatoria de semanas, pues era lo que aparecía dentro de Colpensiones para ese momento específico y frente a lo cual no se podía apartar”.

Pues bien, este aspecto ha sido ampliamente analizado por la jurisprudencia nacional: En la **SL4139-2021** la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostiene que a pesar de las posibles deficiencias en la afiliación del trabajador al sistema pensional, si el empleador realiza el pago de los aportes y la entidad pensional los recibe sin manifestación o reparo alguno, se configura una **aceptación tácita de la afiliación**, sin que pueda predicarse una omisión o falta de afiliación al Sistema<sup>20</sup>, razonando:

(...)

Tal fue la actitud asumida por la entidad pensional, la de una aceptación implícita de la afiliación pues de no estar de acuerdo con la misma, debió proceder a la devolución de los aportes al empleador, lo que efectivamente no hizo sino que, por el contrario, procedió a incluir dichos periodos en la historia laboral del demandante y si bien, aparecen con un reporte de cero semanas de cotización, lo es porque está a la espera de que el afiliado «*adjunte copia de la liquidación de la RESERVA ACTUARIAL con pago expedida por el ISS o Colpensiones; le sugerimos requerir al empleador dicho documento para solucionar dicha inconsistencia*», como se lo indicó en comunicación adiada 18 de noviembre de 2016 en la que dio respuesta a la solicitud que le elevara para la corrección de su historia laboral (f.º 116) y, que el *ad quem* no valoró.

En adición ha considerado la alta corporación que la valoración que los operadores judiciales hacen de la historia laboral no puede ser mecánica, sino que deben ponderarse las circunstancias por las que se desconocen algunos ciclos, en tanto una actividad contraria implica dejar a la voluntad de las administradoras de fondos de pensiones desconocer o validar las cotizaciones (al respecto la sentencia **SL 10147 de 2017**).

En lo referente a la carga de la prueba respecto a las controversias que surgen a partir de las historias laborales, la Corte Constitucional ha expresado que corresponde a las administradoras de pensiones justificar y acreditar las inconsistencias, por cuanto se encuentran obligadas a desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la veracidad, claridad y precisión de la información que allí se consigna, teniendo a su cargo el cobro de las cotizaciones. (**Ver Sentencia SU 182 de 2019 y SU 405 de 2021**). Consideración que comparte la Sala de Casación Laboral de la CSJ al indicar que el Habeas data en materia

<sup>20</sup> **SL196-2019 y SL2810-2019**

pensional implica para el afiliado el derecho a exigir de las administradoras la corrección, adición, actualización de datos, en tanto tal información es trascendental para la conformación y prueba de las prestaciones del sistema **(SL4006-2021)**

A partir de los anteriores lineamientos, observa la Sala que se encuentra acertada la convalidación de las semanas cotizadas por los ciclos de **mayo de 2008, diciembre de 2009** y desde **enero hasta junio de 2013**<sup>21</sup>, en los que se ven reflejados en la historia laboral como días reportados “30” pero en días cotizados “0”, pese a que la sociedad AGROPECUARIA TIERRA DULCE LTDA realizó el pago de las planillas correspondientes al Sistema y con constancia de pago en abril de 2014; incluso, existe **reclamación** del demandante ante COLPENSIONES presentada el 27 de enero de 2017<sup>22</sup> en la que solicita se reflejen las semanas por los períodos pagados por su empleador aportando las constancias de pago, frente a lo cual la entidad emitió un requerimiento en el que relacionó cada ciclo pagado, solicitando se allegara documento de identidad, el formulario de afiliación al Sistema General de Pensiones y el Certificado original de tiempo de servicio expedido por el representante legal<sup>23</sup>.

En lo referente al empleador “RICARDO SIERRA ARANGO”, se validará el período **diciembre de 2012** que aparece en “0” días reportados y “0” días cotizados, se tendrá como ciclo completo de “30” días, toda vez que tiene registro de afiliación y existe continuidad en las cotizaciones desde el mes de julio de 2013 hasta febrero de 2014, sin que exista retiro alguno por parte del empleador, ni justificación alguna para que la entidad no tuviese en cuenta tal pago. Si COLPENSIONES tiene la obligación en el recaudo de los aportes (artículo 24 de la Ley 100), el pago tardío del empleador en manera alguna es oponible al trabajador afiliado **(SL 537-2019, SL 1355-2019, SL4084 2020)**

Teniendo en cuenta aquel cúmulo de semanas se constata que el señor JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA acredita las 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente a la fecha de estructuración de su invalidez, esto es entre el **20 de enero de 2013 y el 20 de enero de 2016**, densidad mínima exigida en el

<sup>21</sup> Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “035MemorialesFolios347Al358, **págs. 1 a 10**”

<sup>22</sup> Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “035MemorialesFolios347Al358, **pág. 11**”

<sup>23</sup> Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “035MemorialesFolios347Al358, **págs. 14 a 16**”

artículo 1 de la Ley 860 de 2003; contando con un total en este lapso de **70,14 semanas<sup>24</sup>**.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a la Sala a **CONFIRMAR** la decisión condenatoria adoptada en primera instancia en relación con la pretensión dirigida al reconocimiento de la **pensión de invalidez**, al verificarse el cumplimiento de los requisitos por contar con una **PCL superior al 50%** y porque supera las **50 semanas cotizadas** en los **tres años anteriores al 20 enero de 2016**, **F de E** establecida en el trámite del proceso por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

Se actualizará el retroactivo calculado con el valor de la mesada equivalente al salario mínimo legal vigente y 13 mesadas anuales al causarse el derecho desde el 20 enero de 2016 en los términos definidos en el AL 1 de 2005. Así, el valor entre el **20 de enero de 2016** y el **30 de junio de 2022** asciende a la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$67´343.480)**, conforme al siguiente detalle:

RETROACTIVO PENSIONAL RDO. 013 2018 00307				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2016	5,75%	11,0366	\$ 689.454	\$ 7.609.228
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022		6	\$ 1.000.000	\$ 6.000.000
TOTAL				\$ 67.343.480

**COLPENSIONES** continuará pagando al señor **JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA** la mesada pensional equivalente al salario mínimo de cada anualidad a partir del **1 de julio de 2022** que será reajustada anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993** y con **14 mesadas anuales**. Y descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, el que opera por mandato legal y **sin necesidad de declaración judicial**, como lo ha expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la **SL 1169 de 2019 – Rad 64.490 del 10 de abril** y la **SL1019-2020 del 12 de febrero**.

<sup>24</sup> Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “035MemorialesFolios347Al358, págs. 1 a 5”

Se propuso por **COLPENSIONES** la excepción de PRESCRIPCIÓN, pero siendo claro que la primera mesada corresponde al mes de **enero de 2016** (fecha de la estructuración de la invalidez) y como la demanda con la que se pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez fue instaurada desde el **18 de mayo de 2018**<sup>25</sup>, en este caso **no ha prescrito mesada pensional alguna**.

## 7. LA CONDENA A INDEXACION

En la sentencia se **CONDENÓ** a la **INDEXACIÓN** del retroactivo pensional reconocido, pretensión que fue solicitada de manera subsidiaria ante el no reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. También se **CONFIRMA** en este aspecto la providencia porque las mesadas reconocidas y no pagadas en su oportunidad legal se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda, derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que esta condena no implica el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el **artículo 16 de la Ley 446 de 1998** según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda (**SL 359 -2021**).

## 8. SOBRE LAS COSTAS

No se causan costas por conocerse el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

## 9. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

<sup>25</sup> Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "003Expediente013201800307, **pág. 8**"

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por la Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, pero con las siguiente ACTUALIZACIÓN:

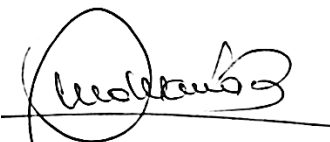
Al numeral **PRIMERO** porque el retroactivo pensional de la pensión de invalidez del señor **JESÚS MARÍA ECHEVERRI ARBOLEDA** causado entre el **20 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2022** asciende a la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$67'343.480)**. Y, COLPENSIONES continuará pagando una mesada pensional a partir del **1 de julio de 2022** equivalente a **UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000)** que será reajustada anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993**, con **13 mesadas al año**

**SEGUNDO: Sin costas** en esta instancia.

Lo anterior se notifica por **EDICTO**, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

Los Magistrados,



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**  
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



RADICADO: 05001 – 31 - 05 – 013 – 2018 - 00307

SENTENCIA //24/06/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,

**para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**

Enlace en caso de no tener lector QR: [https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EqLNDkvm2CRBmGZB-E18tRYBGBRPe8FWT-iGD2csVIG6eA?e=R1noY4](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EqLNDkvm2CRBmGZB-E18tRYBGBRPe8FWT-iGD2csVIG6eA?e=R1noY4)